



RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. -----

Visto para resolver el procedimiento administrativo disciplinario **CI/STC/D/0146/2016**, instruido en contra del **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXXXXXXXXXXXX, por incumplimiento a obligaciones inherentes a su cargo como servidor público; y, -----

RESULTANDO

1.-Que mediante oficio número **D.A.P./53000/0063/16** del quince de enero de dos mil dieciséis, emitido por el C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al suscrito Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, se remitió relación de servidores públicos que realizaron de forma extemporánea su Declaración de Intereses del ejercicio 2015, listado en el que se encuentra el **C. Xavier Martínez Abad**, con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, documento que obra a fojas de la 32 a 41 de autos. -----

2.- **Radicación.** El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, esta Autoridad Administrativa emitió Acuerdo de Radicación, registrando el expediente bajo el número **CI/STC/D/0146/2016**, ordenando practicar las investigaciones y diligencias que fueran necesarias para constatar la veracidad de los hechos denunciados y en su caso incoar el Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente; proveído que obra a foja 42 de actuaciones. -----

3.- **Acuerdo de Inicio de Procedimiento.** Que con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario en el que se ordenó citar al **C. Xavier Martínez Abad**, como probable responsable de los hechos materia del presente, a efecto que compareciera al desahogo de la audiencia prevista en el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Foja 176 a 187 de autos), formalidad que se cumplió mediante el oficio citatorio CG/CISTC/0844/2016 del diez de marzo de dos mil dieciséis, notificado personalmente mediante cédula al **C. Xavier Martínez Abad**, el catorce de marzo de dos mil dieciséis(Foja 188 a la 193 del expediente en que se actúa). -----

4.- **Trámite del procedimiento administrativo disciplinario.** Con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley a que se refiere el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la que compareció el **C. Xavier Martínez Abad** con su abogado, en la cual presentó su declaración



de manera escrita, ofreció pruebas y alegó lo que a su derecho convino (Fojas 196 a la 200 del presente sumario). -----

5.- Turno para resolución. Que por corresponder al estado procesal de los autos del expediente que nos ocupa, se turnaron los mismos a la vista del suscrito para dictar la resolución que en derecho corresponde. -----

Por lo expuesto es de considerarse; y -----

----- **CONSIDERANDO** -----

PRIMERO.COMPETENCIA. Esta Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo, dependiente de la Contraloría General de la Ciudad de México, es competente para conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos al Sistema de Transporte Colectivo, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en su empleo, cargo o comisión, de los cuales tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 primer y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracciones I a IV, 2º, 3º fracción IV, 46, 47, 48, 49, 57, 60, 64 fracción II, 65, 68 y 92 segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 74 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 113 fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 59 fracción X del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo. -----

SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA AL SERVIDOR PÚBLICO. Por razón de método, se procede a fijar la conducta irregular que le fue atribuida al **C. Xavier Martínez Abad** y la cual será materia de estudio en la presente Resolución. Resulta ilustrativa la tesis I.7º.A.672 A que fuera publicada en la página 1638 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009. -----

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONDUCTA ATRIBUIDA EN EL CITATORIO PARA LA AUDIENCIA DE LEY A QUE ALUDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO PUEDE SER MODIFICADA EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. *La fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé la garantía de audiencia, conforme a la cual todo gobernado tiene derecho frente a las autoridades administrativas y judiciales a que se le otorgue oportunidad de defensa por medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los casos en que pueda verse afectada su esfera jurídica. Así, la autoridad en el procedimiento administrativo de responsabilidades debe salvaguardar las*



formalidades esenciales del procedimiento, permitiendo al incoado recabar y preparar las pruebas y alegatos necesarios para su defensa, con el fin de desvirtuar la actuación que al instruirse el citado procedimiento se le imputa. En esas condiciones, la conducta atribuida al servidor público en el citatorio para la audiencia de ley a que alude la señalada fracción I, no puede ser modificada en la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario, para sancionarlo por una diversa, porque al hacerlo se soslayarían las indicadas formalidades, en tanto que no se brindaría al particular la oportunidad de defensa, al no existir un vínculo entre el proceder atribuido al iniciar el procedimiento, que es el que lo motivó, y el reprochado en la determinación con que concluye, por lo que, en todo caso, al advertir elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable, la autoridad está facultada para ordenar la práctica de investigaciones y citarlo para otra audiencia, a efecto de juzgarlo con respecto a la nueva conducta irregular advertida, de conformidad con la fracción III del invocado precepto.-----

La conducta que se le atribuye en el procedimiento al **C. Xavier Martínez Abad** se hizo consistir básicamente en: -----

Presentó de manera extemporánea su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, ya que estaba obligado a presentarla conforme a lo determinado en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; así como en el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015; con lo cual se adecua el incumplimiento del presunto responsable a lo dispuesto en el artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como al Principio de **Legalidad** que rige a la Administración Pública, que alude el primer párrafo del artículo 47 de la Ley Federal citada, precepto legal que señala: -----

“Artículo 47.- “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,



sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan el servicio de las fuerzas armadas...”

Lo anterior, en razón de que los servidores públicos solo se encuentran facultados para hacer lo que la Ley les permite y deben de cumplir cabal y estrictamente lo que ésta les ordena, en beneficio de la colectividad, porque a la sociedad le interesa que los servidores públicos ajusten sus actos a la Ley, en el presente caso no ocurrió así, toda vez que el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, **presentó de manera extemporánea** su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, conforme a lo determinado en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015, y en el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, originándose con la conducta del **C. Xavier Martínez Abad** el presunto incumplimiento al Principio de **Legalidad** que rige el Servicio Público. -----

En ese sentido, el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, presuntamente infringió la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece como obligación de los servidores públicos la siguiente: -----

“...XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público...”

Dicha hipótesis normativa en la especie se vio infringida por el presunto responsable, el **C. Xavier Martínez Abad**, con categoría de Residente A N-10 adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, al incumplir una disposición jurídica relacionada con el servicio público, como lo es lo establecido en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015, que establecen: -----



“Quinta.- DECLARACIÓN DE INTERESES.- Toda las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico.”

“TRANSITORIOS

.
.

***TERCERO.-** La Declaración de Intereses a que se refiere la Política Quinta deberá presentarse en esta primera ocasión, en el mes de agosto de 2015 conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que señale la Contraloría General...”*

De igual forma, la omisión desplegada por el **C. Xavier Martínez Abad** en la fecha de los hechos de reproche administrativo y durante su desempeño con la categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, contravino el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitidos por el C. Contralor General del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, en el que se estableció textualmente que: -----

“TRANSITORIOS

.
.

***Segundo.** La Declaración de Intereses correspondiente al año 2015, se presentará en el mes de agosto de 2015 conforme a las formalidades señaladas en los presentes Lineamientos, y las posteriores se efectuarán en el mes de mayo de cada año...”*

Así las cosas, el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, transgredió las disposiciones Jurídicas antes mencionadas toda vez que aún y cuando estaba obligado, **presentó de manera extemporánea** su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, que lo era durante el mes de agosto de dicho año.-----



TERCERO.PRECISIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIA DE ESTUDIO. Con la finalidad de resolver si el ciudadano **C. Xavier Martínez Abad** es responsable de la falta que se le imputa, esta autoridad procede al análisis de los siguientes elementos: -----

1. Que el ciudadano **C. Xavier Martínez Abad** se desempeñaba como servidor público en la época de los hechos denunciados como irregulares. -----
2. La existencia de la conducta atribuida al servidor público **C. Xavier Martínez Abad** que con dicha conducta haya violentado el marco normativo que resulta aplicable y que ello constituya una violación a alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----
3. La plena responsabilidad administrativa del ciudadano **C. Xavier Martínez Abad** en el incumplimiento a algunas de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

CUARTO.DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEL C. XAVIER MARTÍNEZ ABAD. Por lo que hace al primero de los elementos precisados en el considerando anterior, en autos quedó debidamente demostrado que el **C. Xavier Martínez Abad adscrito** a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo si tiene la calidad de servidor público al momento en que aconteció la irregularidad administrativa que se le atribuye al desempeñarse como Residente A N-10, conclusión a la que llega este Resolutor de la valoración conjunta de las siguientes pruebas: -----

Documental Pública consistente en copia certificada del documento denominado Nombramiento sin número de folio del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual el Lic. Carlos Correa Rodríguez, Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad**, con la categoría de Residente A N-10 mismo que obra en el expediente en que se actúa a foja 83. -----

Documental pública que goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en términos del artículo 45 de este último ordenamiento. -----

Desprendiéndose de la documental mencionada que el primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho el Lic. Carlos Correa Rodríguez, Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad** con la categoría de Residente A N-10 en el Sistema de Transporte Colectivo.-----

QUINTO. EXISTENCIA DE LA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA. Una vez que quedó plenamente acreditada la calidad de servidor público del **C. Xavier Martínez Abad** se



procede al estudio del segundo de los supuestos mencionados en el Considerando TERCERO, consistente en determinar la existencia de la conducta atribuida al servidor público que con dicha conducta haya violentado el marco normativo que resulta aplicable y que ello constituya el incumplimiento a alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

En ese orden de ideas, a efecto de determinar la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida al servidor público con motivo de la conducta que se le imputa se hace necesario establecer, primeramente, si el **C. Xavier Martínez Abad** al desempeñarse como Residente A N-10 en la Gerencia de Obras y Mantenimiento ligado a presentar su **Declaración de Intereses** en el mes de agosto de 2015; conforme a la Política Quinta y artículo Tercero Transitorio del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; y numeral Segundo Transitorio de los *LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN*, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015. -----

En el expediente en que se actúa obran los siguientes medios de prueba: -----

1) Documental Público consistente en copia certificada del documento denominado Nombramiento sin número de folio del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual el Lic. Carlos Correa Rodríguez, Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad**, con la categoría de Residente A N-10 mismo que obra en el expediente en que se actúa a foja 83. -----

Documental pública que goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en términos del artículo 45 de este último ordenamiento. -----

Desprendiéndose de la valoración a la documental mencionada que el primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho el Lic. Carlos Correa Rodríguez, Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad** con la categoría de Residente A N-10 a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, de lo que se diserta que es servidor público del Sistema de Transporte Colectivo y que ocupa **la categoría de Residente A N-10 siendo homólogo por ingresos al personal de estructura de la entidad mencionada**, por lo que estaba obligado a presentar su **Declaración de Intereses** en el mes de agosto de 2015; conforme a la Política Quinta y artículo Tercero Transitorio del



ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; y numeral Segundo Transitorio de los *LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN*, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015. -----

2.- Copia certificada del oficio número **DAP/53000/1554/15** del quince de diciembre de dos mil quince, emitido por el C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al suscrito Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, a través del cual remitió para los efectos procedentes, el listado de los servidores públicos adscritos al Sistema de Transporte Colectivo que omitieron presentar su Declaración de Intereses en el mes de agosto de 2015, listado en el que se encuentra el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de Residente A N-10 adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, documento que obra a fojas 24 a 30 de autos. -----

3.- Copia certificada del oficio número **D.A.P./53000/0063/16** del quince de enero de dos mil dieciséis, emitido por el C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al suscrito Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, a través del cual remitió relación de servidores públicos que realizaron de forma extemporánea su Declaración de Intereses del ejercicio 2015, listado en el que se encuentra el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de Residente A N-10 adscrito a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, documento que obra a fojas de la 32 a 41 de autos. -----

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Probanza de la que de su valoración se desprende que el servidor público el **C. Xavier Martínez Abad** presentó con fecha posterior al mes de agosto de 2015 su Declaración de Intereses, según se aprecia en el consecutivo 142 que obra en las relaciones adjuntas al oficio de mérito. -----



4.-Copia certificada del Acuse de recibo del oficio CG/CISTC/0165/2016 de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México. -----

Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Probanza de la que de su valoración se acredita que el titular del Órgano de Control Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, solicitó al titular de la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México informará si el **C. Xavier Martínez Abad** presentó declaración de intereses y que en caso afirmativo se proporcionara documentación que acreditara tal aserto e inclusive reflejara la fecha de presentación. -----

5.-Copia certificada del Oficio CG/DGAJR/DSP/954/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, emitido por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México. **(Fojas 163 a 173 de autos)** -----

Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Documental de la que de su valoración se desprende que el titular de la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México, informa que respecto al ciudadano **Xavier Martínez Abad se encontró registro que acredita que presentó declaración de intereses con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, esto es, de manera extemporánea, ya que se realizó posterior al mes de agosto de dos mil quince.**-----

6.-Copia certificada del oficio número **GRH/53200/0365/2016** del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, signado por el C. P. José Eduardo Delgadillo Navarro, Gerente de Recursos Humanos del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual envía cuadro descriptivo que contiene expediente, nombre, adscripción, sueldo bruto, sueldo neto y sueldo líquido de 371 servidores públicos, entre los que se encuentra el **C. Xavier Martínez Abad** documentación que obra en copia certificada de fojas 131 a 140 de actuaciones.-----



7.- Copia certificada del oficio número **DAP/53000/257/2016** del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, firmado por el C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual informó que la plaza de nivel más bajo de estructura en el Sistema de Transporte Colectivo, es la 20.5 correspondiente a Enlace “A”, y el sueldo líquido es de \$11,433.56 (once mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.) documentación que obra en copia certificada de foja 175 de actuaciones . -----

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Documentales que en conjunta y exhaustiva valoración se acredita que el cargo que ostenta el ciudadano **Xavier Martínez Abad** es homologo por ingresos al personal de estructura, pues su sueldo de \$11,541.25 (once mil quinientos cuarenta y un pesos 25/100 M.N) es mayor incluso que el sueldo de la plaza de nivel más bajo de estructura en el Sistema de Transporte Colectivo, que es la 20.5 correspondiente a Enlace “A”, cuyo sueldo líquido es de \$11,433.56 (once mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.), y por tanto, era sujeto obligado a presentar su declaración de intereses en el mes de agosto de 2015, conforme a la Política Quinta y artículo Tercero Transitorio del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; y numeral Segundo Transitorio de los *LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN*, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015. -----

En razón de lo anteriormente señalado, esta autoridad advierte que el ciudadano **Xavier Martínez Abad** en su calidad de Residente A N-10 adscrito a la del Sistema de Transporte Colectivo incurrió en responsabilidad administrativa por contravenir lo dispuesto en el artículo 47 fracción fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, precepto legal que señala: -----

“...Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin dañe sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al



respeto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: -----

“...XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público...” -----

Afirmación que se sustenta en el supuesto que el puesto que ostenta el ciudadano **Xavier Martínez Abad** conforme al documento denominado Nombramiento sin número de folio del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual el Lic. Carlos Correa Rodríguez, Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad** con la categoría de Residente A N-10 a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho; mismo que obra en el expediente en que se actúa a foja 83,y por tanto, le corresponde la presentación de la declaración de intereses conforme a la Política Quinta del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015, por lo que tenía la obligación de declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos; lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que determine la Contraloría General de la Ciudad de México en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo en comento y Segundo Transitorio de los Lineamientos aludidos que disponen que dicha declaración de intereses prevista en la citada Política Quinta, en primera ocasión debió presentarse en el mes de agosto de 2015; obligaciones que inobservó el incoado en razón que omitió presentar su Declaración de Intereses en la fecha mencionada, como se acreditó con oficio CG/DGAJR/DSP/954/2016 de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, por el cual informó respecto al **C. Xavier Martínez Abad** que se encontró registro que acredita que presentó su Declaración de Intereses hasta el ocho de septiembre de dos mil quince, esto es, de manera extemporánea, pues esta se realizó posterior al mes de agosto de 2015.-----

En ese sentido, el **C. Xavier Martínez Abad** infringió la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece como obligación de los servidores públicos la siguiente: -----



“...XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público...” -----

Dicha hipótesis normativa en la especie se vio infringida por el presunto responsable, el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de Residente A N-10 adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, al incumplir una disposición jurídica relacionada con el servicio público, como lo es lo establecido en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015, que establecen: -----

“Quinta.- DECLARACIÓN DE INTERESES.- Toda las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico.”

“TRANSITORIOS

.

***TERCERO.-** La Declaración de Intereses a que se refiere la Política Quinta deberá presentarse en esta primera ocasión, en el mes de agosto de 2015 conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que señale la Contraloría General...”*

De igual forma, la omisión desplegada por el **C. Xavier Martínez Abad** en la fecha de los hechos de reproche administrativo y durante su desempeño con la categoría de Residente A N-10 adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, contravino el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitidos por el C. Contralor General del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, en el que se estableció textualmente que: -----



“TRANSITORIOS

Segundo. *La Declaración de Intereses correspondiente al año 2015, se presentará en el mes de agosto de 2015 conforme a las formalidades señaladas en los presentes Lineamientos, y las posteriores se efectuarán en el mes de mayo de cada año...*”

Así las cosas, el C. Xavier Martínez Abad con categoría de Residente A N-10 adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, transgredió las disposiciones Jurídicas antes mencionadas toda vez que aún y cuando estaba obligado, presentó de manera extemporánea su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, la realizó fuera del plazo establecido, que lo era durante el mes de agosto de dicho año.-----

No es óbice para tener acreditada la plena responsabilidad administrativa en la irregularidad que se atribuye al servidor público **C. Xavier Martínez Abad**, los argumentos de defensa que hace valer en su escrito con el cual compareció al desahogo de su Audiencia de Ley del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, los cuales esta autoridad si bien está obligado a su análisis no está obligada a su transcripción. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, misma que se lee bajo el siguiente rubro. -----

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo XV de las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. -----

Por lo que en este apartado se reproduce como si a la letra se insertara, del cual se hace un extracto en obvia de repeticiones, en el cual medularmente manifestó que:

El procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en mi contra es violatorio del Artículo Primero Constitucional.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

La Contraloría Interna, al instaurar dicho procedimiento viola el derecho humano consistente en que toda persona tiene derecho a que las autoridades que investiguen y juzguen la posible comisión de irregularidades administrativas sean imparciales, objetivas e independientes.

La Contraloría Interna, viola mis derechos humanos, cuando las instancias investigadoras de comisión de irregularidades son dependencias subordinadas y sujetas al principio de jerarquía de los órganos que van a calificar la procedencia o no de las supuestas irregularidades que indebidamente me atribuyen, con lo que se manifiesta la falta de independencia en el procedimiento de formulación de las imputaciones en mi contra.



La Contraloría Interna, viola mis derechos humanos, cuando las instancias sancionadoras de comisión de irregularidades administrativas son las mismas que toman las decisiones administrativas que supuestamente originaron la responsabilidad del suscrito.

En la Constitución y en la normatividad de la Contraloría Interna, también se viola esta disposición, ya que la existencia de un juicio uninstitucional, como el que es este procedimiento disciplinario, es en sí mismo violatorio de derechos humanos al negar la posibilidad de recurrir la resolución. Es más grave la violación cuando la emisión de la resolución no se hace con base en un procedimiento que garantice la independencia, objetividad e imparcialidad del órgano que la dicta.

Principio de Presunción de Inocencia.-Con la reforma al artículo 20 constitucional de 18 de junio de 2008, se reconoce expresamente el principio de presunción de inocencia.

En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, en tanto que el presunto responsable no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

De lo anterior se advierte que la Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario; esto implica que corresponde a la autoridad desvirtuar la inocencia probando la ilicitud de la conducta, así opera desde que se inicia la investigación hasta la resolución final que la destruya.

Bajo esa premisa, es de señalar que el actuar de esa H. Contraloría, es de plena observancia a la obligación impuesta de cumplir con todos y cada uno de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Además, el procedimiento debe declararse sin materia y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a contestar AD-CAUTELAM el infundado e improcedente, procedimiento disciplinario No. CI/STC/D/00146/2016, instaurado en mi contra, sin que ello signifique consentimiento o aceptación alguna, negando categóricamente desde este momento todas y cada una de las imputaciones atribuidas al suscrito, así como el haber infringido cualquier disposición normativa del Consejo y haber realizado cualquier acto indebido y/o haber cometido cualquier falta administrativa en el desempeño de mis funciones y/o haber causado un daño patrimonial al Sistema de Transporte Colectivo, en la época de los hechos para lo cual hago valer las consideraciones de hecho y derecho siguientes:

LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO de la Contraloría para acusar ya que la misma parte de una premisa equivocada al emitir el oficio citatorio CG/CISTC/0844/2016, del 10 de marzo del año en curso, en razón que los Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos que se señalan, señalan de manera textual que se deberán de presentar dicha declaración en el mes de mayo de cada ejercicio.

LA DE OSCURIDAD, en virtud de que el presente procedimiento disciplinario de oficio instaurado en contra del suscrito, imposibilita el accionar de conocer con certeza el sentido de la pretensión de la Contraloría, lo cual afecta directamente mis derechos humanos y el derecho a defenderme, protegido expresamente en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, como se puede apreciar de la simple lectura del expediente en que se actúa, la autoridad es omisa en señalar cuál fue la forma en la que supuestamente incurri en las conductas que refiere, ya que no expresa, ni mucho menos acredita las mismas.

La Contraloría no señala de manera expresa e indubitable la existencia de la conducta supuestamente irregular, por lo que la imputación carece de validez jurídica toda vez que no satisface los requisitos de debida fundamentación y motivación legal, por las razones siguientes:

El Artículo 16 Constitucional dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.



LA CONSISTENTE EN EL DEFECTO LEGAL, toda vez que cuando la Contraloría reclama determinada conducta de del suscrito, la misma se encuentra obligada a expresar con precisión y claridad suficientes, los hechos que se me imputan pormenorizadamente, esto es, con todo detalle, sin omitir ninguna circunstancia de lugar, tiempo y modo; o bien situaciones que den lugar al presente procedimiento, ya que al omitirse la narración de los mismos, impide, por una parte, que el suscrito esté en aptitud de desvirtuarlos, a través de la preparación debida de la defensa y, luego, que la Contraloría pueda delimitar la litis y resolver en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada y, sobre todo, lógica y jurídicamente con base en autos, porque la simple y genérica imputación que se me hace carece de sustento material y legal, es decir, resulta insuficiente la simple mención de las disposiciones si las mismas no están concatenadas a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de tal manera que carece de fundamento los motivos que de manera imprecisa se me están atribuyendo, por lo que en sí misma, la procedencia de una imputación no apoyada en hechos, debe de estimarse acreditada como una excepción de oscuridad y **defecto legal de procedencia del procedimiento disciplinario de oficio**, ante la imprecisión de la causa de la imputación.

En este orden de ideas, como se desprende del expediente en que se actúa, no existe causa, motivo o razón por la cual deba de ser considerado el suscrito en la tramitación del presente procedimiento, máxime que no existe fundamento ni mucho menos motivación legal para que la Contraloría haya efectuado una revisión con múltiples deficiencias de apreciación técnica de obra pública.

En primer término, quiero señalar de manera puntual, que desde 1 de octubre de 1992, periodo que ingrese a laborar en el Sistema de Transporte Colectivo, a la fecha un servidor siempre se ha conducido salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, de tal manera que nunca me había sido sujeto a un Procedimiento Administrativo, en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de tal manera que el presente expediente me ha causado extrañeza toda vez, que durante mi trayectoria ha resultado intachable y en la cual me deterioro en mi labor del servicio público.

Además cabe resaltar, que el suscrito, no está obligado a presentar Declaraciones de Situaciones Patrimoniales, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

los Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos que se señalan, también lo es que BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2015, al suscrito en ningún momento me notificaron la obligación de presentar la DECLARACIÓN DE INTERESES, sino por el contrario, a principios del mes de septiembre de 2015, se comunicaron vía telefónica personal de esa H. Contraloría, con el propósito de invitarme a presentar la citada declaración, misma que se presentó el 8 de septiembre de ese mismo año, cumpliendo a cabalidad con las disposiciones jurídicas citadas.

Es decir, solamente la sentencia condenatoria priva de la calidad de inocente.

El artículo 17-Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disposición jurídica que es aplicable de manera análoga a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en razón que ésta última disposición no se opone con el artículo señalado, ya que en atención al principio pro personae, está en aptitud de abstenerse de imponerle cualquiera de las sanciones administrativas que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En especial la derivada de la presentación de la declaración de intereses, dicha irregularidad se subsanó el 8 de septiembre de 2015, por lo que los efectos que se produjeron con la omisión, fueron resarcidos, y por tanto no habría materia que diera sustento a la aplicación de una sanción por la conducta que originó el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas.

Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto, y en cualquiera de esos supuestos, los efectos que se hubieran producido desaparecieron o se resarcieron

De igual forma ofreció las probanzas consistentes en:

1.- La copia simple consistente en la declaración de intereses, presentada por el C. Xavier Martínez Abad de fecha 8 de septiembre del 2015 2.- La Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones contenidas en el expediente CI/STC/D/0146/2016, 3.- La presuncional Legal y Humana,



Adicionalmente, en vía de alegatos, manifestó: -----

Que en este acto nos remitimos al escrito de fecha 28 de marzo de 2016.

Ahora bien, es de señalarse que en ningún momento se violaron los derechos humanos del compareciente y esto es así porque el citatorio de audiencia de ley que constituye el antecedente de la resolución, también incluyó todos los requisitos formales tales como el aspecto competencial y todos aquellos dispositivos legales que dan pauta para la investigación y el procedimiento que desde luego desde el principio se hicieron del conocimiento del servidor público mediante la notificación de estilo, misma que se cumplió con todos los requisitos legales y la mejor prueba de ello lo constituye que el involucrado compareció al desahogo de la audiencia de ley, ejerciendo todos sus derechos de defensa, compareciendo con abogado, presentando su declaración por escrito, ofreciendo probanzas, interviniendo en la audiencia y alegando lo que a su derecho convino, de tal suerte que en forma alguna se afectaron sus derechos o defensas y por lo que es insuficiente para desacreditar su responsabilidad el invocar que el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra es violatorio del Artículo Primero Constitucional, estando fuera de la realidad que esta Contraloría Interna, al instaurar dicho procedimiento violó el derecho humano consistente en que toda persona tiene derecho a que las autoridades que investiguen y juzguen la posible comisión de irregularidades administrativas sean imparciales, objetivas e independientes, argumentos que son insuficientes para acreditar dichas situaciones, toda vez que no existe la supuesta transgresión a la que hace referencia

Además cabe puntualizar que cuanto la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece la forma en la cual se citara al presunto responsable; quiere esto decir, que ahí se contiene el procedimiento a seguir para citar al servidor público y en este contexto es factible señalar que esta autoridad en todo momento respetó tanto las formalidades del procedimiento consagradas en la constitución, así como las señaladas en la ley de la materia, por lo que no le asiste ninguna causa de justificación para argumentar que se violaron sus derechos humanos, aunado a que el involucrado compareció por medio de un defensor, pues dentro del citatorio de audiencia de ley número CG/CISTC/0844/2016 de fecha 10 de marzo del año en curso, se le hizo saber que tenía derecho de acudir asistido por un defensor a efecto de comparecer al desahogo de la audiencia, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera, situación que en la especie se dio, toda vez que estuvo asistido de Lic. Lic. Perla Brisa Plascencia Zuñiga.

De lo anteriormente se desprende que esta autoridad respetó en todo momento las formalidades del procedimiento, así como atendió a los señalado en el artículo 64 de la Ley de la materia.

Por lo que carece de razón el servidor público al invocar transgresiones constituciones y a sus derechos humanos, pues esta Contraloría cumplió todos y cada uno de los



requisitos señalados en el artículo 64 de la Ley de la materia, y tampoco le asiste la razón al involucrado en cuanto a la supuesta falta de independencia en el procedimiento de formulación de las imputaciones en su contra, en una supuesta violación directa al artículo 8 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, toda vez que de acuerdo a todos y cada uno de los preceptos señalados dentro del citatorio de audiencia de ley esta Contraloría Interna dentro de sus facultades están las de investigar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios, lo que conlleva el desahogo de la audiencia de ley correspondiente y la emisión de la respectiva resolución, ya que la actuación de este Órgano de Control Interno estuvo siempre apegado a derecho y se ha realizado de forma imparcial.

Y de constancias se desprende que esta Contraloría Interna, ha actuado bajo las tutela de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad que le faculta a iniciar un procedimiento administrativo en contra de un servidor público adscrito a este Sistema en el Sistema de Transporte Colectivo, acreditándose que se han observado las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de audiencia, señalada en dicho precepto de la Ley de la materia, pues en principio de cuentas el procedimiento administrativo en contra del hoy enjuiciante, al ser un acto de autoridad estuvo revestido de las cualidades de la debida fundamentación y motivación, cumpliendo así con la norma constitucional que en el grado de derecho fundamental se le denomina garantía de legalidad lo que se traduce en que ese acto incluya la descripción sucinta de los hechos con todos los rasgos que permitan ubicar esa conducta u omisión del gobernado o servidor público, en la hipótesis normativa de la Ley. Ahora bien justamente la tramitación de ese procedimiento es la que permite al involucrado ejercer su derecho de defensa, declarando respecto de los hechos que se investigan, ofreciendo pruebas y legando respecto de lo que su derecho convenga, de tal manera que también su garantía individual de seguridad jurídica permaneció incólume, no pasando desapercibido que el hoy enjuiciante fue debidamente notificado para comparecer a audiencia de Ley ante esta autoridad administrativa, así por cuanto hace a la declaración, pruebas, y alegatos que de conformidad con el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos el C. Xavier Martínez Abad, se encontró en posibilidad de rendir ante esta Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo, de conformidad con el oficio citatorio número CG/CISTC/0844/2016, resaltando que el día señalado para el desahogo de audiencia de ley, compareció asistido de su abogada, con lo cual se evidencia que lejos de haber violado supuestamente sus derechos humanos como mendazmente lo señala, en todo momento se respetó su garantía de audiencia, quedando así de manifiesto que esta autoridad en todo momento respeto las formalidades inherentes al procedimiento.

Resultando insuficientes los argumentos hechos valer por el servidor público en el sentido que se violan sus derechos humanos al negar la posibilidad de recurrir la resolución, toda vez que cae en un error al afirmar dicha situación, ya que sí puede interponer en contra de la presente resolución el medio de defensa previsto en la Ley de la Materia, es decir, que la presente resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la misma, a través del recurso de revocación ante esta Contraloría Interna, o bien, mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo



Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Así, siguiendo con el análisis de los argumentos del servidor público, debe decirse que los mismos no son capaces de desvirtuar la conducta que obra en su contra, mismos que son tendientes únicamente a evadir su responsabilidad, ya que también resultan por demás alejados de la realidad, los consistentes en la supuesta transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que dentro del citatorio de audiencia de ley número CG/CISTC/0844/2016, se señalaron las presuntas irregularidades que obran en su contra, aunado a que se le dio el carácter de presunto responsable, evidenciándose así que en dicho procedimiento tiene la calidad de “presunto responsable”.

Y de constancias se desprende que esta Contraloría Interna en todo momento ha respetado los principios constitucionales, los de debido proceso y principio de presunción de inocencia, lo cual se corrobora con el citatorio de audiencia de ley ya mencionado, así como con el Acta de Audiencia de Ley verificada el día veintiocho de marzo del año en curso, en la cual compareció con abogada, ofreció su escrito constante de 30 fojas útiles, así como probanzas y alegó lo que a su derecho convino.

Resaltando que es hasta que se emita la presente resolución, es en donde se tendrán o no por acreditaras las irregularidades, de igual forma se señalaran las probanzas con las cuales se acreditaron dichas irregularidades, por lo que los argumentos hechos valer por el servidor público dentro de su escrito resultan ineficaces para desacreditar las imputaciones que obran en su contra, pretendiendo aludir a transgresiones de diversos artículos tanto constitucionales como de derechos humanos, que en la especie no se actualizan en el presente asunto.

En efecto, las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de la materia y por último, las Constitucionales, establecen las garantías de audiencia y seguridad jurídica, entendidas como un derecho subjetivo público otorgado en favor de los gobernados y oponibles a los órganos del Estado, cuyo objeto es exigir a estos últimos el cumplimiento de ciertos requisitos con antelación a la emisión del acto que pudiese afectar la esfera jurídica de los individuos, en el caso en particular, este Órgano de Control Interno tuvo especial atención en no transgredir ningún derecho del servidor público y menos aún dejarlo en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, de tal forma que tuviera todos los elementos necesarios que le permitieran analizar y estructurar su defensa en contra de las imputaciones que obraban en su contra.

En esa tesitura, esta Contraloría Interna reconoce vital importancia a esta diligencia procesal dado que del correcto desarrollo de la misma, el Órgano de Control Interno se allega de todos los elementos que el incoado ofrece y que le permitirán a la autoridad administrativa establecer la relación jurídica procesal que vincula a las partes durante la substanciación del procedimiento administrativo, otorgándole al incoado la oportunidad de comparecer a realizar



todas y cada una de las manifestaciones, realizar ofrecimiento de todo medio de prueba que considere idóneo, y formular los alegatos que estime convenientes, para así desvirtuar el procedimiento instaurado en su contra, a fin de dilucidar sus derechos con estricto apego a derecho, sin embargo, la citación que realiza el Órgano de Control Interno a efecto que comparezca el procedimentado es para efecto de cubrir cada uno de las formalidades esenciales del procedimiento, no pasando desapercibido que aún y cuando el hoy enjuiciante compareció a la audiencia de ley, con dichos argumentos hechos valer, no logra desvirtuar las imputaciones que obran en su contra.

Por consiguiente, queda de manifiesto, la estricta observancia de la normatividad que rige a este Órgano de Control Interno y que resulta aplicable en el ámbito de su competencia, siendo incuestionable que en todo momento se garantizó al incoado, el cumplimiento de las garantías formales de audiencia y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Desprendiéndose de actuaciones que esta autoridad administrativa, siempre protegió, garantizó y respetó todos y cada uno de los derechos del servidor público, por lo cual resultan inatendibles sus argumentos en ese sentido, aunado que siempre se actuó de forma imparcial, sin ningún tipo de distinción por su edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias, por lo que resulta inexacto el argumento hecho valer por el C. Xavier Martínez Abad, pues son argumentos inclinados a tratar de rehuir de su responsabilidad como servidor público.

Aunado a lo anterior, este Órgano de Control Interno dio un trato de igualdad al involucrado, por lo tanto todos sus argumentos encaminados a la supuesta transgresión de sus derechos humanos, son erróneos, siendo se resaltar que el servidor público únicamente se constriñe a transcribir artículos y textos sobre el tema de derechos humanos y garantías individuales, sin realizar razonamiento lógico-jurídico que acredite la supuesta transgresión a la que hace referencia.

Al respecto este resolutor determina que todas y cada una de las aseveraciones señaladas dentro de las 30 fojas de su escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, no aportan elementos suficientes para desvirtuar la irregularidad que se le imputa, toda vez que las mismas se constituyen en meras afirmaciones subjetivas que al no encontrarse contrastadas mediante otros elementos efectivos de prueba, tendientes a corroborar sus manifestaciones, no resultan suficientes para el efecto de corroborar la ausencia de responsabilidad como es pretendido por el diciente, las cuales se valoran en calidad de indicio en términos de los artículos 285, 286, y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, supletorio en términos del diverso 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto es así, toda vez que en relación a que el presente procedimiento administrativo carece de fundamentación y fundamentación, debe decirse que, en efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de Autoridad debe estar adecuado y suficientemente



fundado y motivado. Lo primero se cumple cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y lo segundo cuando se señalan, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de Autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en que se apoya el acto de Autoridad. -----

En ese sentido, cabe distinguir entre la falta de fundamentación y de motivación, por un lado, y la indebida fundamentación y motivación, por el otro, pues por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, mientras que la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la Autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de Autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. -----

Luego entonces, como en el caso de las manifestaciones del compareciente, no se aprecia de manera clara y evidente por qué no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de Autoridad que señala y las normas aplicadas en el propio acto. Al no tener tal contenido, sus manifestaciones resultan insuficientes en la medida en que la simple afirmación genérica de que el acto de Autoridad carece de la debida fundamentación y motivación. -----

Se cita en apoyo a lo anterior, la Tesis I.6o.C.82 K, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, visible en la página 1818, del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la Autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de Autoridad y las normas aplicables a éste."

Lo anterior es así, pues para considerar que existe carencia de fundamentación y motivación es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar porque la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad, sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio Jurisprudencial: -----

Novena Época. Registro: 162826. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: IV.2o.C. J/12. Página:



2053. **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA.** Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad.

Ahora, contrario a la manifestación realizada por el compareciente, el presente procedimiento administrativo, se encuentra suficientemente motivado y fundado, toda vez que en el mismo se citan con claridad las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas en que se apoya su instauración, las cuales convergen con las normas aplicadas, en otras palabras, en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en que se apoya el acto de Autoridad, el cual se inició debido a que **presentó de manera extemporánea** su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, ya que estaba obligado a presentarla conforme a lo determinado en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; así como en el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, con lo cual incurrió en responsabilidad administrativa por contravenir lo dispuesto en el artículo 47 fracción fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que existen en actuaciones el oficio **GRH/53200/0365/2016** del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, signado por el C. P. José Eduardo Delgadillo Navarro, Gerente de Recursos Humanos del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual envía cuadro descriptivo que contiene expediente, nombre, adscripción, sueldo bruto, sueldo neto y sueldo líquido de 371 servidores públicos, entre los que se encuentra el **C. Xavier Martínez Abad**, que obra en actuaciones, y el oficio número **DAP/53000/257/2016** del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, signado por el C.P. Antonio Chávez Patiño, Director de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual informó que la plaza de nivel más bajo de estructura en el Sistema de Transporte Colectivo, es la 20.5 correspondiente a Enlace "A", y el sueldo líquido es de \$11,433.56 (once mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.), con los que se acredita que el **C. Xavier Martínez Abad**, con categoría de **Residente A N10**, tiene un ingreso neto de \$11,541.25 (once mil quinientos cuarenta y un pesos 25/100



M. N.), **con lo cual resulta ser homólogo a puesto de estructura por ingresos**, en virtud de que sus percepciones salariales son mayores al nivel más bajo de plaza de estructura que existe en el Sistema de Transporte Colectivo, toda vez que la plaza de nivel más bajo de estructura es el 20.5, con un sueldo con las deducciones aplicadas relativas al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los artículos 42, 102, 140 y 199 de la Ley del ISSSTE, de \$11,433.56 (once mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M. N.); y al **ostentar un cargo homólogo a puesto de estructura por ingresos**, se encontraba obligado a presentar su respectiva Declaración de Intereses en el mes de Agosto de 2015, lo cual no sucedió así, toda vez que de acuerdo con lo informado en el Oficio número **CG/DGAJR/DSP/954/2016** del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno en el Sistema de Transporte Colectivo, emitido por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, se advierte que el **C. Xavier Martínez Abad, presentó declaración de intereses con fecha ocho de septiembre de dos mil quince**, por lo tanto vulneró lo establecido en el artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como al Principio de **Legalidad** que rige a la Administración Pública, que alude el primer párrafo del citado precepto. -----

Por otro lado, referente a las manifestaciones relacionadas en que supuestamente los Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos que se señalan, señalan de manera textual que se deberán de presentar dicha declaración en el mes de mayo de cada ejercicio, las mismas son erróneas, y se tienen por desacreditadas para tal efecto, toda vez que como ya se señaló dentro de dicha normatividad establece en el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitidos por el C. Contralor General del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, en el que se estableció textualmente que: -----

“TRANSITORIOS

.

Segundo. *La Declaración de Intereses correspondiente al año 2015, se presentará en el mes de agosto de 2015 conforme a las formalidades señaladas en los presentes Lineamientos, y las posteriores se efectuarán en el mes de mayo de cada año...*”

Así las cosas, el **C. Xavier Martínez Abad** con categoría de **Residente A N-10** adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, transgredió las disposiciones Jurídicas antes mencionadas toda vez que aún y cuando estaba obligado, **presentó de manera extemporánea** su



Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, que lo era durante el mes de agosto de dicho año.-----

Con respecto a sus manifestaciones del servidor público en el sentido que no tenía la obligación de presentar dicha declaración y que en ningún momento le notificaron la obligación de presentar la declaración de intereses, sino por el contrario, a principios del mes de septiembre de 2015, se comunicaron vía telefónica, con el propósito de invitarlo a presentar la citada declaración, resulta que el ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; asimismo, los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, fueron publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015, situación por demás suficiente para el C. **Xavier Martínez Abad**, como Servidor Público adscrito al Sistema de Transporte Colectivo, se diera por enterado que debía de presentar su respectiva Declaración de Intereses dentro del plazo establecido en la referida normatividad; lo anterior es así, toda vez que atendiendo **al Principio de Publicidad de las normas jurídicas característico del Estado de Derecho**, conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los gobernados, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones normativas para poder cumplirlas, con lo que se procura e intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que en nuestro país se sigue el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la norma en un medio de difusión oficial como lo es la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que la sola publicación de estas permite que los habitantes de la entidad federativa puedan conocer la ley y, por ende, verse obligados por ella; de ahí la obligación del C. **Xavier Martínez Abad**, de conocerla y cumplir con sus disposiciones como servidor público, en razón de que los servidores públicos sólo se encuentran facultados para hacer lo que la Ley les permite y deben de cumplir cabal y estrictamente lo que ésta les ordena, en beneficio de la colectividad, porque a la sociedad le interesa que los servidores públicos ajusten sus actos a la Ley, y en el presente caso no ocurrió así, toda vez que con la conducta desplegada por el C. **Xavier Martínez Abad**, en la época de reproche administrativo no vigiló el cumplimiento de las mencionadas disposiciones legales. -----

Sirve de sustento la siguiente tesis por analogía:

Décima Época Registro: 2000100 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. II/2012 (10a.) Página: 2908 LEYES Y



DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA BASTA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establece que las leyes y decretos expedidos por dicho órgano legislativo, para efectos de su "debida aplicación y observancia", serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en tanto que su publicación en el Diario Oficial de la Federación es únicamente para "su mayor difusión", por lo que para su validez y vinculación, es innecesario que se publiquen en este último medio de difusión oficial. La anterior interpretación se fortalece si se atiende a la exégesis teleológica del citado precepto, en la que se considera que uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas, conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los gobernados, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones legislativas para poder cumplirlas, con lo que se procura combatir la arbitrariedad de los gobernantes y se intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica. Lo anterior es así, ya que en nuestro país se sigue el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial como el Diario Oficial en materia Federal y la Gaceta Oficial del Distrito Federal en materia local, por lo que la sola publicación en esta última permite que los habitantes de la entidad federativa puedan conocer la ley y, por ende, verse obligados por ella; de ahí que la publicación en el Diario Oficial de la Federación sólo constituye una facultad discrecional de la Asamblea Legislativa. Amparo directo en revisión 1807/2011. Fredy Rivera Hernández. 4 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.

Por lo anterior, contrario a lo señalado por el manifestante, no era necesario que se le notificara oportuna, directa y expresamente para cumplir con la obligación de presentar su Declaración de Intereses dentro del plazo establecido, puesto que al ser sujeto obligado, en razón de ser **homólogo a puesto de estructura por ingresos**, como ya se manifestó anteriormente, debió cumplir con dicha obligación; no siendo obstáculo lo manifestado por el **C. Xavier Martínez Abad**, en el sentido de que se desde que ingresó a este Sistema de Transporte se ha conducido salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad resultan insuficientes para desacreditar la imputación que obra, pues dicha situación no se encuentra en cuestionamiento dentro la imputación que se le atribuye.-----

Y debe decirse que es inexacto el dispositivo hecho valer por el involucrado, referente al *artículo 17-bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que dicha* normatividad no es la aplicable al presente procedimiento administrativo, por lo que tales manifestaciones no resultan convenientes a su defensa; sin embargo, resulta que el propio servidor público acepta haber presentado de manera extemporánea su declaración de intereses para el ejercicio 2015, al señalar que: “.. que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto, lo cual evidencia la irregularidad en que incurrió, resultando concordante con el oficio número **CG/DGAJR/DSP/954/2016**, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual informó respecto al **C. Xavier Martínez Abad, se encontró registro que acredita que presentó declaración de intereses con fecha ocho de septiembre de dos mil quince**, sin embargo, pretende justificar su conducta, por lo que tales argumentos no crean convicción en esta Contraloría Interna, toda vez que no son idóneas para desacreditar la imputación que originalmente se le atribuyó, dichas aseveraciones resultan insuficientes para desestimar su manifiesto grado de Responsabilidad Administrativa, debido a que no señala, ni concreta algún razonamiento



capaz de ser analizado, ya que parte de premisas equivocadas que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues ninguna de estas van encaminadas a desestimar la imputación que esta Autoridad Administrativa le atribuye, por lo que no pueden ser tomados como medio de prueba para desvirtuar, ni siquiera para justificar la extemporaneidad en la presentación de su respectiva Declaración de Intereses del ejercicio 2015, ya que como servidor público estaba obligado a presentarla en el mes de agosto de 2015, lo que en la especie no aconteció, el **C. Xavier Martínez Abad**, con categoría de **Residente A N-10**, tiene un ingreso neto de 11,541.25 (once mil quinientos cuarenta y un pesos 25/100 M. N.), **con lo cual resulta ser homólogo a puesto de estructura por ingresos**, en virtud de que sus percepciones salariales son mayores al nivel más bajo de plaza de estructura que existe en el Sistema de Transporte Colectivo, toda vez que la plaza de nivel más bajo de estructura es el 20.5, con un sueldo con las deducciones aplicadas relativas al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los artículos 42, 102, 140 y 199 de la Ley del ISSSTE, de \$11,433.56 (once mil cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M. N.); infringiendo con su conducta lo establecido en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incumpliendo con ello la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del citado ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES; así como lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los referidos LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, en tal razón los argumentos vertidos por el servidor público, resultan inoperantes e insuficientes para considerar que no es administrativamente responsable de la irregularidad administrativa que se le atribuye, pues contrario a ello, sus manifestaciones únicamente evidencia aún más los medios de convicción por medio de los cuales se le imputa su responsabilidad administrativa. -----

Ahora bien, respecto de las pruebas ofrecidas por el servidor público, dentro de su Audiencia de Ley, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se tuvieron por admitidas las pruebas consistentes en 1.- la copia simple consistente en la declaración de intereses, presentada por el C. Xavier Martínez Abad de fecha 8 de septiembre del 2015 2.- La Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones contenidas en el expediente CI/STC/D/0146/2016, 3.- La presuncional Legal y Humana, así por cuanto hace a la copia simple del acuse de recibo electrónico de la declaración de intereses de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, arrojada por el Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública de la Ciudad de México, al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 285, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo, la misma no favorece la defensa de su oferente, puesto que del acuse de recepción de mérito se desprende indubitablemente la omisión de no haber presentado su Declaración de Intereses



en el mes de agosto de 2015 ; en efecto esto es así, toda vez que la omisión del servidor público, se consumó el día ocho de septiembre de dos mil quince, fecha en que el servidor público presentó su Declaración de Intereses, lo cual hizo fuera del plazo establecido para hacerlo, agosto de 2015, es decir, la consumación de la conducta omisa del citado servidor público, se prolongó en el tiempo, ello en virtud de que el momento procesal en el que debe entenderse como consumada una infracción administrativa, por una transgresión a las hipótesis señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se configura cuando produciéndose el resultado o agotándose la conducta se verifica una lesión jurídica, es decir, para que se dé la consumación de la conducta es determinante que se haya producido el resultado, en otras palabras la irregularidad administrativa que nos ocupa se originó el día 31 de agosto de 2015, fecha en la que feneció el término para presentar la declaración de Intereses, omisión que trajo como resultado el incumplimiento a lo establecido en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que incumplió la Política Quinta en correlación con la Política Octava y el artículo Tercero Transitorio del citado ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES; así como lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los referidos LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, razón por la cual, los argumentos esgrimidos por el incoado resultan insuficientes para desvirtuar la imputación atribuida. -----

Ahora bien, respecto de LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que integran el expediente en que se promueve, mediante las cuales se acredita que el suscrito con su actuar no estaba obligado a presentar la declaración de Conflicto de Intereses y mucho menos que se le haya hecho saber en forma oportuna dicha obligación produjo daño alguno al Sistema de Transporte Colectivo, y mucho menos puede considerarse que su conducta fue irregular; siendo que la misma por no requerir mayor requisito, se tiene por desahoga por su propia y especial naturaleza, y se valora conforme a lo dispuesto en el artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual no le favorecen a la defensa de su oferente, puesto que de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende indubitablemente la extemporaneidad en la presentación de su Declaración de Intereses en el mes de agosto de 2015; en efecto, toda vez que la conducta del servidor público, **se consumó el día ocho de septiembre de dos mil quince**, fecha en que el **C. Xavier Martínez Abad**, presentó su Declaración de Intereses, lo cual se encuentra fuera del plazo establecido para hacerlo, agosto de 2015, conducta **que trajo como resultado** el incumplimiento a lo establecido en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que incumplió la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del citado ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS



POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES; así como lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los referidos LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, razón por la cual, los argumentos esgrimidos por el incoado resultan insuficientes para desvirtuar la imputación atribuida. -----

Respecto a la probanza consistente en la Presuncional Legal y Humana, debe decirse que en la presente resolución, esta autoridad ha hecho el enlace armónico de todos los medios de prueba que se encuentran ligados íntimamente en la conducta atribuida a la servidora pública, y como esta constituye una infracción al artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relacionado con la normatividad tantas veces citada, por lo que este Órgano de Control Interno estima que las presunciones constituyen el medio de prueba indirecta, en cuya virtud el juzgador en interés a la ley, o en acatamiento a la lógica deriva como acreditado un hecho desconocido por ser consecuencia de un hecho conocido que ha sido probado, en el caso que nos ocupa ha quedado demostrado la presentación de la declaración de intereses fuera del plazo por parte de la servidora pública.-----

Así en vía de alegatos el servidor público ratificó las manifestaciones realizadas dentro de escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por lo tanto en obvio de repeticiones se tienen por contestados en el mismo sentido, sin que sean conducentes para desacreditar la responsabilidad que obra en su contra.-----

Por todo lo expuesto se puede concluir que las probanzas y alegatos del **C. Xavier Martínez Abad**, resultan inoperantes, insuficientes e inconducentes para desvirtuar la irregularidad administrativa que se le atribuye, pues de las diversas probanzas que obran en autos, mismas que fueron valoradas en el presente fallo y cuyo alcance probatorio pleno acreditan que el **C. Xavier Martínez Abad**, quien en la época de los hechos que se le atribuyen se desempeñaba como **Residente A N-10** en el Sistema de Transporte Colectivo, es administrativamente responsable de las irregularidades que se le atribuyen en el asunto que se resuelve, al no desempeñar con eficiencia y rectitud el empleo y servicio encomendado en beneficio de los intereses del citado Sistema, ya que de los elementos de convicción se acreditó que en la fecha en que sucedieron los hechos de reproche administrativo, **presentó de manera extemporánea** su Declaración de Intereses correspondiente al ejercicio 2015, es decir, **la realizó fuera del plazo establecido**, conforme a lo determinado en la Política Quinta y el artículo Tercero Transitorio del ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA



PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015, y en el artículo Segundo Transitorio de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015. -----

SEXTO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.- Una vez analizadas las constancias que integran el expediente que se resuelve y toda vez que ha quedado acreditada la plena responsabilidad del servidor público en la infracción al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su fracción XXII, se procede a la individualización de la sanción que le corresponde, atendiendo para ello las fracciones I a VII, que prevé el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como a continuación se realiza: -----

a) La fracción I del precepto en análisis, trata sobre la responsabilidad en que incurrió el servidor público implicado y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de la ley de la materia o las que se dicten con base a ella. Sobre el particular cabe señalar que del análisis a las constancias que integran el presente disciplinario se advierte no se trató de una conducta grave, lo que sin duda favorece los intereses del incoado sin embargo, aún ante la falta de gravedad de la irregularidad en que incurrió el servidor público se hace necesario suprimir dichas prácticas, de manera específica en el caso en particular, que el servidor público cumpla con las obligaciones que le imponen las normas que regulan su función como Residente A N-10 adscrito a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.-----

b) En cuanto a la fracción II relacionada con las circunstancias socioeconómicas del **Xavier Martínez Abad** debe tomarse en cuenta que se trata de una persona de XX años de edad, con instrucción educativa de XXXXXXXXXXXX y por lo que hace al sueldo mensual que devengaba en la época de los hechos que se atribuyen, éste ascendía a la cantidad de \$15,490.00, (quince mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.); lo anterior de conformidad con la declaración del ciudadano de mérito contenida en el acta administrativa instrumentada con motivo del desahogo de su Audiencia de Ley, que se llevó a cabo el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, del expediente que se resuelve, a la cual se le concede valor probatorio de indicio en términos de lo dispuesto por el artículo 285 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, circunstancia que se robustece con la documental consistente en el oficio número GRH/53200/0365/2016 de fecha cuatro de febrero dos mil dieciséis emitido por el Gerente de Recursos Humanos en el que agregó relación anexa de la que se advierte que el mencionado servidor público tiene un sueldo neto de \$11,541.25 (once mil quinientos cuarenta y un pesos 25/100 M.N) documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280,



281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De igual forma de la audiencia de ley antes mencionada, se desprende la edad, instrucción educativa y sueldo mensual aproximado que devengaba en la época de los hechos irregulares que se le atribuyen; circunstancias que permiten a esta autoridad afirmar que el involucrado estaba en aptitud de conocer y comprender sus obligaciones como servidor público así como de entender las consecuencias de su actuar irregular. -----

c) Respecto de la fracción III, en lo concerniente al nivel jerárquico, lo antecedentes y las condiciones del infractor, como ya se ha señalado al **C. Xavier Martínez Abad** funge como Residente A N-10 adscrito a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo situación que se acredita con la copia certificada del documento denominado Nombramiento sin número de folio del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual el Lic. Carlos Correa Rodríguez Director de Administración emitió nombramiento a favor del **C. Xavier Martínez Abad** con la categoría de Residente A N-10 a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho; mismo que obra en el expediente en que se actúa a foja 83, documental pública que goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en términos del artículo 45 de este último ordenamiento, con la que se acredita que el **C. Xavier Martínez Abad** fungía en la época de los hechos irregulares que se le imputan como Residente A N-10 en el Sistema de Transporte Colectivo, a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho;-----

Por lo que hace a los antecedentes del infractor, a foja 161 y 162 obra el oficio CG/DGAJR/DSP/604/2016, de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis suscrito por el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General, a través del cual informó a esta Contraloría Interna que el **C. Xavier Martínez Abad** a la fecha no cuenta con registro de antecedente de sanción, por lo que no se puede afirmar que sea reincidente en incumplimiento a alguna de las obligaciones previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

Respecto de las condiciones del infractor debe decirse, que de autos en el expediente en que se actúa, no se observa que existan circunstancias que la excluyan de responsabilidad, ya que por el contrario de dichos autos se aprecia que contaba con la experiencia y capacidad necesaria, así como con los medios para cumplir cabalmente con las obligaciones que como servidor público tenía encomendadas.-----

d) En cuanto a la fracción IV del precepto legal que nos ocupa, esta señala las condiciones exteriores y los medios de ejecución, al respecto cabe señalar que de autos no se advierte la existencia de ninguna condición externa que hubiere influido en el ánimo del servidor público el **C. Xavier Martínez Abad** para realizar la conducta irregular que se le atribuyó en el Considerando Segundo; en cuanto a los medios de ejecución, se observa que estos se dan



al momento en que al fungir como Residente A N-10 por lo que es **homólogo en salario al personal de estructura del Sistema de Transporte Colectivo** conforme a la Política Quinta del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; tenía la obligación de presentar su **Declaración de Intereses**, conforme a lo señalado por el cuerpo legal invocado, en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo en comento y Segundo Transitorio de los Lineamientos aludidos que disponen que dicha declaración de intereses prevista en la citada Política Quinta, en primera ocasión debió presentarse en el mes de agosto de 2015; obligaciones que inobservó el incoado en razón que omitió presentar su Declaración de Intereses en el mes aludido como se acreditó con oficio número CG/DGAJR/DSP/954/2016 de fecha 19 de febrero 2016 signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual informó respecto al **C. Xavier Martínez Abad se encontró registro que acredita que presentó declaración de intereses con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, y no en el mes de agosto de dos mil quince**, tal como quedó acreditado en el Considerando Quinto, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias.-----

e) En cuanto a la fracción V, respecto a la antigüedad en el servicio público del **C. Xavier Martínez Abad** debe decirse que el implicado mencionó durante el desahogo de la audiencia de ley que se llevó a cabo el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, que es de cuarenta y tres años en la Administración Pública. -----

f) La fracción VI, respecto a la reincidencia del **C. Xavier Martínez Abad** como servidor público en el incumplimiento de las obligaciones, al respecto debe decirse que a foja 161 y 162 obra el oficio CG/DGAJR/DSP/604/2016 de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del cual se informó a esta Contraloría Interna que a esta fecha no se localizó antecedente de registro de sanción a nombre del **C. Xavier Martínez Abad** por lo que no puede ser considerado como reincidente en incumplimiento de alguna obligación del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

g) Finalmente, la fracción VII del artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativa al monto del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones es menester señalar que del análisis a los autos del expediente que se resuelve la conducta realizada por el **C. Xavier Martínez Abad** no implicó daño económico o perjuicio al patrimonio del sistema de Transporte Colectivo. -----



Así, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procede a fijar la sanción aplicable al **C Xavier Martínez Abad** tomando en consideración las circunstancias particulares que se dieron en el asunto que nos ocupa. -----

Por ello, conforme al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta las sanciones aplicables a las faltas administrativas, las cuales consistirán en apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión, sanción económica, destitución del puesto e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----

En ese sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, la autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales para determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones de los servidores públicos resultan graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones y el monto del daño o beneficio económico causado o el beneficio que se haya obtenido, a fin de que sea acorde a la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para que tenga el alcance persuasivo necesario y, a su vez, evitar que en su extremo, sea excesiva, tal y como así ha quedado definido en la siguiente jurisprudencia: -----

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: -----

I. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley;



- II. *Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;*
- III. *El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;*
- IV. *Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;*
- V. *La antigüedad en el servicio; y,*
- VI. *La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.*

Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. -----

En ese sentido, es de tomarse en cuenta en que la conducta en que incurrió el **C. Xavier Martínez Abad** consistente en que en su categoría de Residente A N-10 es **homólogo en salario al personal de estructura del Sistema de Transporte Colectivo**, por lo que estaba obligado a presentar su declaración de Intereses conforme a la Política Quinta y artículo Tercero Transitorio del **ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES** publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; en correlación con el Segundo Transitorio de los Lineamientos aludidos que disponen que dicha declaración de intereses prevista en la citada Política Quinta, en primera ocasión debió presentarse en el mes de agosto de 2015; obligaciones que inobservó el incoado en razón que omitió presentar su Declaración de Intereses en el mes aludido como se acreditó con el oficio CG/DGAJR/DSP/954/2016 de fecha 19 de febrero 2016 signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual informó respecto al **C. Xavier Martínez Abad se encontró registro que acredita que presentó declaración de intereses con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, esto es, de manera extemporánea, pues se realizó posterior al mes de agosto de dos mil quince**, siendo una conducta que no se considera grave, mas con su conducta contraviene el principio de legalidad que todo servidor público debe observar, como lo prevé el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya finalidad se centra en que los servidores públicos se conduzcan cumpliendo a cabalidad con la ley en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. -----

De esta forma, es claro que en un correcto equilibrio entre la falta administrativa acreditada al **C. Xavier Martínez Abad** quien cometió una conducta considerada no grave y la sanción a imponer, debe ponderarse dicha situación y su afectación al servicio público. -----

Por tal consideración, se estima que la sanción que se le imponga debe de ser superior a un apercibimiento público, asimismo, no debe ser superior a una amonestación pública. -----

En tal virtud y considerando que la conducta realizada por el **C. Xavier Martínez Abad** incumplió con la obligación contemplada en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal



de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se estima procedente imponer la sanción administrativa consistente en una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, en términos de lo dispuesto 53 fracción II y 56 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el numeral 75 de dicho ordenamiento. -----

Misma que no resulta insuficiente ni excesiva para evitar que se susciten en el futuro conductas como la aquí analizada, con la cual el **C. Xavier Martínez Abad** incumplió una disposición jurídica relacionada con el servicio público. -----

Por lo anteriormente expuesto y fundado; es de acordarse y se; -----

-----**RESUELVE**-----

PRIMERO. Esta Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo, es competente para conocer, iniciar, tramitar, y resolver el presente procedimiento administrativo disciplinario, en los términos expuestos en el considerando Primero de esta resolución. -----

SEGUNDO. El **C. Xavier Martínez Abad** **ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** por infringir la exigencia prevista en el artículo 47, fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

TERCERO. Se impone al **C. Xavier Martínez Abad** una sanción administrativa consistente en una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, en términos de lo dispuesto 53 fracción II y 56 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el numeral 75 de dicho ordenamiento. -----

CUARTO. Notifíquese la presente resolución con firma autógrafa al **C. Xavier Martínez Abad** para los efectos legales a que haya lugar.-----

QUINTO. Hágase del conocimiento al **C. Xavier Martínez Abad** que en pleno respeto a sus Derechos Humanos y garantías, puede interponer en contra de la presente resolución el medio de defensa previsto en la Ley de la Materia, es decir, que la presente resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la misma, a través del recurso de revocación ante esta Contraloría Interna, o bien, mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-----

SEXTO. Remítase testimonio de la presente resolución al Secretario de Movilidad, al Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General, para los efectos legales conducentes en el ámbito de su respectiva competencia. -----



SÉPTIMO. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales Expedientes relativos a las Quejas y Denuncias, Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Procedimientos Administrativos de Responsabilidad y Recursos de Revocación, sustanciados por la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 párrafo primero y segundo, inciso A fracciones II; 14 primer párrafo; 16 párrafo segundo; 108 párrafo primero; 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3 fracción IV, 47 fracciones I y IV, 57, 60, 61, 62, 64 fracción I, 65, 66, 68, 71, 73 párrafo primero; 91 y 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículos 34, fracciones V, VII, VIII, XXVI y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 40 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV, XVIII, XIX; 10, 12 fracciones V y VI; 36; 38 fracción I y IV; 39; 44, 89, 91 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1; 3 fracción IX; 30, fracción VI y VII, 31 al 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; artículos 1, 7, fracción XIV; 28 fracciones III y IV; 105 fracciones I, VII, VIII, IX y XVII; 105 – A fracciones I, II, III, IX y XIII; 105 – B fracciones I y II; 106 fracciones I, XIII, XVII, XVIII, XXIII, XXIX y XXXVIII, 107 fracciones I, XI, XIV, XXIX y XXXI; 113 fracciones II, X, XI, XII, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales 5, 10 y 11 Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y artículo 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, cuya finalidad es formación, integración, sustanciación y resolución de los expedientes relativos a Quejas y Denuncias, Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Procedimientos Administrativos de Responsabilidad y Recursos de Revocación que conoce la Contraloría Interna. El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación y ubicación de las personas involucradas y/o interesadas en conocer los actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la investigación de presuntas violaciones a los Derechos Humanos; el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para la sustanciación de Recursos de Revisión, Denuncias y Procedimientos para determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; los Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. -----
El responsable del Sistema de datos personales es el Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias, Contralor Interno, y la dirección donde podrá ejercer los



derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública ubicada en la Avenida Tlaxcoaque 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México; correo electrónico oip@contraloriadf.gob.mx. -----

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. -----

OCTAVO. Complimentado en sus términos, archívese el expediente de cuenta como asunto total y definitivamente concluido y háganse las anotaciones en los registros correspondientes.-----

**ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL ARQ. CARLOS ENRIQUE MANCERA COVARRUBIAS
CONTRALOR INTERNO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. -----**

KMGS/JGGM

